

LA NEOLIBERALIZACIÓN DE LA SOCIAL DEMOCRACIA

La derrota de las opciones totalitarias en Europa al finalizar la segunda guerra mundial afirmó la creencia en torno a la supremacía de los procesos parlamentarios como mecanismos idóneos para el desarrollo de los principios democráticos, al mismo tiempo que la reorientación de la política estatal creaba una imagen de consolidación de los principios de justicia social. Bajo tal contexto la socialdemocracia parecía instalarse permanentemente como la institución hegemónica del capitalismo por excelencia.

Empero, el Estado, en la forma en que se consolidó a partir de la postguerra, parece estar atrapado en una paradoja que tal vez haya llevado consigo desde su mismo nacimiento: *"... mantener su retórica democrática si es que ha de prevalecer la función de acumulación, o de la incapacidad para estimular una mayor acumulación si es que ha de ser fiel a su ideología democrática"* (16), y que, con el paso del tiempo, ha ahondado su incidencia en el manejo de la cuestión pública. El recrudecimiento de la crisis del sistema durante la década de los setenta condujo a un pesimismo dentro del análisis teórico respecto a la pertinencia de la intervención estatal, proyectando como visión dominante la convicción de la presencia de una crisis de legitimidad del Estado como rasgo distintivo del "capitalismo tardío".

La transformación del entramado social condujo a una modificación en los procesos de legitimación-deslegitimación presentes en el desarrollo del capitalismo tardío, los cuales rebasaron completamente la capacidad de procesamiento del conflicto social por parte de los regímenes socialdemócratas (aunque este problema no es exclusivo de la

socialdemocracia en particular, sino que involucra al aparato estatal de las sociedades en el estadio de desarrollo tardocapitalista), abriendo espacios por los que han aparecido nuevos actores en el escenario político nacional -organizaciones sociales marginales, movimientos alternativos tales como las formaciones ecologistas, feministas, pacifistas, etc.-, que difícilmente encajan dentro de la lógica de dominación tradicional, planteando una serie de demandas sociales imprevistas para el sistema. Así, la respuesta estatal ha consistido en una apertura del espacio político, como tentativa de absorción de tales actores y preservar con ello la estabilidad social, aunque en la práctica ello ha significado un debilitamiento en la hegemonía socialdemócrata así como un fortalecimiento de las posiciones económicas liberales.

El aspecto más relevante de este proceso quizás sea el desmontamiento de la lógica de la sociedad, pues el incremento continuo en el bienestar social transformó al individuo de un ciudadano participativo en un consumidor voraz, desplazando al conflicto social de la relación Estado-sociedad civil hacia la relación Estado-mercado, vale decir, la discusión política tendería progresivamente a centrarse en la delimitación de las esferas pública y privada como espacio para la consolidación del reino de la satisfacción, supliendo al reino de la igualdad como demanda prioritaria de la participación de los votantes racionales - significados éstos últimos cada vez más como consumidores y menos como ciudadanos (17) -en el juego político. La imposibilidad real del Estado para satisfacer las demandas derivadas de esta transformación será entonces el principal factor que explique el desgaste de la figura estatal (18).

En resumen, la situación se plantea como una separación cada vez mayor entre el individuo, que se siente menos representado, y el Estado, incapaz de dar solución a la polarización de intereses que produce la separación de democracia y liberalismo, es decir, se muestra incapaz de amortiguar las contradicciones entre la lógica del capital y la lógica democrática; todo ello determina que los mecanismos de mediación clásicos se vean avocados a cumplir alternativamente con los roles despolitizadores y politizadores, en un intento de dar respuesta a ambas lógicas, aunque dentro de este proceso la lógica del capital se consolida paulatinamente tratando de imponer como solución la neutralización de las relaciones políticas.

La crisis de la democracia representativa ha merecido un amplio debate desde distintas perspectivas teóricas, que involucran tanto visiones marxistas, como la elaborada por O'Connor, como visiones de corte neoliberal, como el análisis elaborado por la Comisión Trilateral en la década de los setenta (19). Las principales hipótesis que condujeron dicho debate pueden resumirse a grosso modo de la siguiente manera: desde una perspectiva neomarxista James O'Connor remite la crisis de la democracia representativa a una problemática derivada de la crisis fiscal del Estado, la cual se explica como resultado de una sobrecarga de demandas sociales a las que el Estado respondió mediante una continua expansión de sus servicios y su intervención asistencial con el objeto de garantizar la legitimidad del sistema. Sin embargo, aunado a estos requerimientos sociales subsiste como determinante fundamental para la intervención del Estado la de garantizar la acumulación del capital, por lo que una parte sustantiva del gasto estatal debe ser canalizada a la creación de condiciones óptimas para el desenvolvimiento del capital; expresado en las mismas palabras de O'Connor:

“El Estado debe esforzarse por crear y conservar condiciones idóneas para una rentable acumulación de capital y, por otro lado, por crear y conservar condiciones idóneas para la armonía social. Un Estado capitalista que usara abiertamente sus propias fuerzas de coerción para ayudar a una clase a acumular capital a costa de otras clases, perdería legitimidad y socavaría las propias bases de lealtad y consenso. Pero un Estado que ignorara la necesidad de estimular el proceso de acumulación de capital correría el riesgo de cegar la fuente del propio poder: la capacidad de la economía de generar excedentes y los impuestos gravados sobre tales excedentes” (20).

Como complemento de sus argumentos O'Connor afirma que mientras las necesidades de gasto son crecientes, las bases financieras de dicho gasto son insuficientes debido a la imposibilidad estratégica del Estado para incrementar los impuestos. Entonces la crisis de la democracia no expresa sino la incapacidad financiera del Estado para mantener sus roles de alimentación del sistema.

En esta misma línea se mueven las tesis de autores como Alan Wolfe, quien plantea el problema desde la perspectiva de la incapacidad estatal para reproducir las bases de la legitimidad de su dominación. Para Wolfe la historia política del capitalismo está construida a partir de las tensiones entre las concepciones liberales y democráticas, las cuales sintetizan su enfrentamiento en la figura del Estado. En la actualidad la lucha que implica dicha dualidad se encuentra en un empate de fuerzas que ha cuestionado las maneras tradicionales de operar del Estado, atrapándolo en sus propias contradicciones y dejándolo sin soluciones. Para Alan Wolfe la crisis actual es una crisis de legitimidad del

Estado ya que ni el gobierno ni la política *"son capaces de superar el estancamiento que ocasiona la extinción de alternativas"* (21).

Con un contenido prácticamente similar, algunas corrientes conservadoras han planteado el análisis de la crisis de la democracia, aunque a diferencia de las anteriores, éstas enfatizan el aspecto de la sobrecarga de demandas sociales, calificándolo como el factor inductor de la ineficiencia administrativa del gobierno y, por consiguiente de la pérdida de legitimidad del mismo. Esta visión conservadora tiene distintas versiones, siendo una de las más influyentes la elaborada por la Comisión Trilateral en su informe sobre la crisis de la democracia (22). De acuerdo con esta interpretación, la década de los sesentas se significó por ser portadora de una explosión democrática que, al paso del tiempo, devino en una disminución de la confianza de la sociedad hacia su gobierno; este alejamiento social respecto de sus gobiernos se explicaría por la creciente expansión de la actividad económica del Estado (expansión que no se refleja en la calidad de los servicios públicos), que redundaba en una pérdida de su capacidad de dominación, presentándose en consecuencia un desequilibrio democrático. Este cuadro de relaciones políticas sería el producto de un proceso amplio de transformaciones culturales que se resumen en la figura de un desafío antiautoritario, el cual condujo a la formación de un nuevo consenso social que, empero, no se planteaba ningún objetivo político concreto. Esta postura teórica está clara en que la solución a la falta de gobernabilidad se encuentra en un recorte de las prácticas resueltas al interior del Estado, como condición básica para la recuperación de la capacidad de gestión del mismo; vale decir, se propone descargar al Estado de proveer la satisfacción directa de las demandas sociales. Como corolario de esta propuesta, los

expertos de la Trilateral sugerían impulsar la reducción del tamaño del Estado mediante procesos de descentralización política y de reducción de la regulación económica estatal.

En ese mismo informe de la Trilateral, concretamente en el capítulo 3 escrito por Samuel Huntington, se explicaba que el "brote democrático" de los sesenta había exigido pagar un alto costo en gobernabilidad y su diagnóstico terminaba con esta frase lapidaria: *"La vitalidad de la democracia en Estados Unidos en la década de los sesenta produjo un aumento considerable de actividad gubernamental y una disminución considerable de la autoridad gubernamental"*. La disminución de la autoridad está en el fondo de la crisis de gobernabilidad y por tanto lo que hay que corregir es el "exceso de democracia" y moderarla es una exigencia. La tesis de Offe al respecto es la siguiente:

"No hace falta hacer un gran esfuerzo de interpretación para descifrar la crisis de gobernabilidad detectada como la manifestación políticamente distorsionada del conflicto de clase entre trabajo asalariado y capital, o para ser más precisos: entre la exigencias políticas de reproducción de la clase obrera y las estrategias privadas de reproducción del capital".

Hubo una tercera posición en este debate, la cual acepta algunos de los presupuestos de los análisis anteriores en términos del inadecuado comportamiento de la figura estatal, pero que, en el ámbito político plantea una explicación alternativa basada en la transformación de la racionalidad social, factor que provoca un cambio sustantivo en las relaciones entre valores y estructuras en los niveles de las preferencias, participación y expectativas políticas. De acuerdo con Jürgen Habermas, la crisis de la democracia se explica como resultado de que los recursos económicos disponibles para la sociedad no son

suficientes para satisfacer las necesidades de los sectores sociales afectados por el crecimiento capitalista, situación que plantea el dilema de incrementar la participación estatal a costa del crecimiento o desatender tales reclamos a costa de la estabilidad política. Tal como lo plantea el mismo Habermas:

"...En la sociedades liberal-capitalistas las crisis se hacen endémicas porque los problemas de control no resueltos a tiempo, generados por el proceso de crecimiento económico a intervalos más o menos regulares, amenazan como tales la integración social" (23).

En cualquier caso, la constante presente en el debate sobre la democracia representativa consiste en la disparidad entre las demandas sociales y la oferta pública. Así, podemos hablar ya de la crisis fiscal del Estado o bien de la ingobernabilidad inherente al Estado keynesiano como rasgos característicos de la problemática contemporánea y al Estado como el sujeto fundamental de la misma.

Estos análisis sitúan de manera indirecta- las más de las veces- en el centro de la dinámica de la crisis a las organizaciones socialdemócratas, en tanto que la resolución de la problemática económica del Estado se ha traducido fundamentalmente en la búsqueda de mecanismos de contención del gasto público (en tanto que el eventual incremento de la carga fiscal podría desatar una fuerte oposición política), variable instrumental que, como habíamos ya mencionado, contribuyó de manera preponderante para expandir la presencia de dicha corriente en el escenario político. A lo anterior habría que añadir que la confusión conservadora experimentada por la sociedad ha forzado un replanteamiento en la relación que el Estado guarda con la sociedad civil, estableciendo que como parte integrante del

intercambio de bienes públicos, los usuarios de las instituciones de bienestar privilegien el contenido cualitativo de los mismos, sin que ello se traduzca en una reducción en las cantidades exigidas, recargando con ello la presión sobre la capacidad financiera del Estado.

Lo anterior evidencia la identificación que se ha efectuado entre el Estado Benefactor y la socialdemocracia como protagonistas de la crisis del sistema, asimilando el primero al anquilosamiento de las iniciativas sociales, y mostrando al segundo como ejecutante de las iniciativas que crearon tal institución. La argumentación precedente se convirtió entonces en un arma política privilegiada en manos de los neoliberales, que les permitió suplir en el manejo de la cosa pública a los socialdemócratas (quizás el ejemplo más notorio de esta situación sea la derrota sufrida por el laborismo inglés a manos de la conservadora Margaret Thatcher a finales de los setenta). El desmoronamiento socialdemócrata ha sido, por tanto, resultado de la imposibilidad para preservar el esquema de reproducción social bajo los lineamientos estratégicos desarrollados a lo largo de la postguerra, que se vio preso de fuertes presiones centrífugas generadas por las mismas fuerzas que se había encargado de conciliar.

Es debido a estas razones que la estrategia socialdemócrata ha tenido que cambiar para adaptarse a las nuevas condiciones sociales existentes, respondiendo pragmáticamente mediante un acercamiento hacia las posiciones de derecha, privilegiando la lógica del capital para preservar su permanencia en la cúspide del poder político. Así, podemos hablar de una respuesta socialdemócrata a esta situación conflictiva, la cual fue adquiriendo creciente fuerza y tiene su mayor configuración en el proceso de unificación europea.

La Unión Europea (UE) surge, como Comunidad Económica Europea (CEE), bajo la concepción de partidos claramente prosistémicos, como los partidos demócrata-cristianos de Europa occidental, los cuales estaban firmes en la creencia de que la recuperación económica europea a nivel internacional tendría que pasar necesariamente por un proceso de restauración conjunta de las potencialidades europeas, lo que implicaba salvar el obstáculo que significaban los distintos Estados-nación para la acumulación de capital a este nuevo nivel. Sin embargo, los avances conseguidos desde la derecha no fueron sustanciales por dos razones: en primer lugar, no se logró romper las distintas barreras nacionales, puesto que al irse recuperando paulatinamente la economía internacional, la visión global de los capitalistas dejó de tener vigencia, es decir, se fue recuperando igualmente el sentimiento nacionalista de la economía.

En segundo lugar, los primeros años de la construcción de la CEE fueron también los testigos de la consolidación del proyecto socialdemócrata que hemos descrito anteriormente, lo que colocaba a estos partidos en una situación de ventaja política que les permitía rechazar la adopción de un proyecto emanado de la derecha, lo que fue traduciéndose en un gran descuido del proyecto regional.

Como resultado de estas premisas el proyecto de CEE fue transformado en uno de mercado común, limitado a la simple verificación de acuerdos de carácter comercial e incapaz de influir, de manera sustantiva, en las diferentes políticas nacionales.

Vemos, por lo tanto, que el fracaso del proyecto de la derecha se explica, en gran medida, por su incapacidad para generar dentro del marco de una democracia ampliamente participativa una base de apoyo social que cobijara su proyecto.

El panorama económico que se viene configurando desde los años setentas y que se consolida durante los años ochentas, ha puesto en entredicho las bases materiales de sustentación del modelo socialdemócrata-keynesiano, en tanto que esta evolución económica ha deteriorado la fortaleza económica del Estado y sus funciones "benefactoras", esto, al mismo tiempo, implicaría la urgencia por reorientar el esquema de acumulación, tanto a nivel nacional, (señalado líneas arriba), como de manera primordial, a nivel internacional. Esto último se explicaría de acuerdo con el análisis que fue elaborado de las causas que han avanzado el proceso de transformación de las relaciones económicas internacionales. En él se ha señalado como un aspecto crucial el debilitamiento del dólar como medio de cambio internacional y la tentativa del gobierno norteamericano de recomponer su hegemonía a partir del fortalecimiento de su moneda en ausencia de una base productiva que lo respalde, estrategia que, de acuerdo con Michel Aglietta (24), ha incrementado el número de "externalidades" en el sistema económico internacional y ha propiciado el surgimiento de una doble dinámica de acumulación de capital. De acuerdo con ello, se ha producido un divorcio, cada vez más amplio, entre el ámbito productivo ("economía real") y el ámbito financiero.

El rompimiento de los principios monetarios establecidos en Bretton Woods por parte del gobierno de Estados Unidos en agosto de 1971 representó el inicio de un largo periodo de inestabilidad económica internacional, en el que el carácter globalizador de las

relaciones económicas capitalistas habría de convertirse en un factor crucial para agudizar dicha situación.

El movimiento incierto de los tipos de cambio y de las tasas de interés habría de conducir a un aceleramiento en el comportamiento de los flujos de capital financiero, impidiendo con ello el cumplimiento de los objetivos de estabilidad macroeconómica previstos por los distintos gobiernos nacionales envueltos en este escenario. Lo anterior condujo al ensayo de distintas estrategias globales que pretendieron reducir la incidencia del desorden monetario en la conducción económica, como fueron los casos de los llamados acuerdos del Smithsonian, así como la creación del Comité para la Reforma del Sistema Monetario Internacional auspiciado por el Fondo Monetario Internacional, sin que alcanzaran los resultados previstos.

Fue entonces que la búsqueda de la estabilidad se orientó hacia estrategias menos ambiciosas: la fragmentación del sistema a partir de acuerdos con un alcance regional. Los primeros ensayos sobre esta nueva iniciativa fueron protagonizados por algunos gobiernos europeos quienes, en el marco de la Comunidad Económica Europea reactivaron las conversaciones monetarias iniciadas a finales de la década de los sesentas para concluir en la necesidad de diseñar mecanismos que redujeran la exposición monetaria internacional de los países agrupados en dicha organización. La primera expresión de dicha estrategia consistió en la creación de la "serpiente europea", un sistema de bandas de flotación cambiaria para el intercambio efectuado entre los países participantes en esa institución, siendo este un experimento fallido debido a serios problemas en la administración de dicho

sistema y a la imposibilidad de salirse del circuito del dólar bajo las condiciones operativas de los mecanismos establecidos en ese sistema.